



**SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL**  
Acta N° 39

Proceso: ORDINARIO LABORAL  
Demandante: JAIRO DE JESÚS VELEZ GONZÁLEZ  
Demandado: TOUCHSTONE GOLD HOLDING S. DE R.L.  
Procedencia: JUZGADO DIECINUEVE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN  
Radicado N°: 05001-31-05-019-2019-00484-01 (20-156)

En Medellín, a los doce (12) días del mes de marzo dos mil veintiuno (2021), en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 15 del Decreto Legislativo No 806 del 04 de junio de 2020, y en consonancia con el artículo 10 del Acuerdo PCSJA20-11567 05/06/2020 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados **VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**, quien actúa como Magistrado Sustanciador, **SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE** y **CARLOS JORGE RUIZ BOTERO**, una vez discutido y aprobado el respectivo proyecto, procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, dentro del proceso ordinario instaurado por **JAIRO DE JESÚS VÉLEZ GONZÁLEZ** en contra de la **TOCHSTONE COLOMBIA**, con radicado Nro. 05001-31-05-019-2019-00484-01 (20-156).

Se deja constancia que el respectivo proyecto fue puesto a consideración de la Sala, y estando debidamente aprobado, se procede a dictar la providencia que en derecho corresponda.

**1. ANTECEDENTES**

Mediante vocero judicial el señor JAIRO DE JESÚS VÉLEZ GONZÁLEZ persigue que se declare la existencia de un contrato a término indefinido desde el 08 de agosto de 2016 hasta el 31 de julio de 2018, y como consecuencia se condene al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales como cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios y, por otra parte, a las vacaciones, a la sanción por despido sin justa causa, a la sanción por no cancelar las cesantías de manera oportuna, la sanción del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por no consignación de las cesantías en un fondo, la indemnización moratoria del artículo 65 del CST, las cotizaciones al fondo de pensiones, la indexación, lo ultra y extra petita y las costas procesales.

Como soporte fáctico de la demanda señala los siguientes hechos: que el 8 de agosto de 2016 inició labores en la empresa demandada, ejerciendo labores de silvicultura; que fue despedido el 31 de julio de 2018 sin justa causa; que prestó sus servicios de manera personal, subordinada y continua, cumpliendo horario de trabajo para la empresa demandada; que las labores se desarrollaron en el municipio de Segovia, lugar donde se encontraban los terrenos de exploración y explotación minera de la empresa demandada; que el último salario devengado fue de \$ 3.000.000; que siempre desempeñó sus funciones con los elementos y herramientas de la empresa demandada; que a la terminación del contrato no se le liquidaron y cancelaron las prestaciones sociales; que durante la vigencia de la relación laboral no fue afiliado a ningún fondo de pensiones, no se le cancelaron cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones, con lo cual concluye que la empresa demandada incurrió en actos de mala fe.

## **TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA**

Mediante auto del 23 de agosto de 2019, el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín la admitió y dispuso la notificación y el traslado a la demandada (fol.25).

Mediante acta del 16 de septiembre de 2020 (Archivo No 4 expediente digitalizado), el despacho de origen envía a través de correo electrónico la notificación personal a la entidad accionada, en la que adjunta el acta de notificación personal, el auto admisorio, la demanda y sus anexos. Tal acto fue enviado al correo electrónico [cgl@touchstonegoldholdings.com](mailto:cgl@touchstonegoldholdings.com), dirección electrónica tomada del correspondiente certificado de existencia y representación legal.

La entidad demandada contestó la demanda a través de correo electrónico el 30 de septiembre de 2020 (Archivo No 1 expediente digitalizado).

El 30 de septiembre de 2020 (Archivo No 5 expediente digitalizado), la parte demandada propone incidente de nulidad “absoluta e insaneable” *“de todo lo actuado a partir de la notificación vía correo electrónico a la entidad demandada, ya que el despacho violentó el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional al omitir adecuar el trámite procesal y el rito procedimental a las directrices que en materia de notificaciones introdujo el Decreto 806 de 2020, ello por evidenciarse una violación de los derechos fundamentales del debido*

*proceso, del derecho de defensa, el de la bilateralidad de la audiencia y de la tutela efectiva de mi defendida, y una vez se dicte la providencia judicial que corrija la omisión y el yerro del Despacho, se proceda nuevamente con la notificación del auto admisorio a mi cliente y se continúe con el trámite que legalmente corresponda”*

### **DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA**

El a quo mediante auto del 14 de octubre de 2020 (Archivo No 9 expediente digitalizado), luego de correr traslado de la nulidad propuesta, consideró que la parte demandante el 16 de septiembre de 2020 solicitó “nuevamente” enviar la citación al correo electrónico [cgl@touchstonegoldholdings.com](mailto:cgl@touchstonegoldholdings.com), aportando con ello el certificado de existencia y representación legal, ante lo cual, procedió ese despacho a efectuar el trámite previsto en el artículo 8 del Decreto 806 de 2020.

Igualmente señaló que la causal invocada no se encuentra enlistada en el artículo 133 del CGP; no obstante, precisó que, de considerarse la remota existencia de la nulidad, la misma se encuentra saneada de conformidad con lo previsto en el numeral 4° del artículo 136 del CGP, *“cuando a pesar del vicio el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa”*, dado que mediante escrito presentado el 30 de septiembre de 2020, el apoderado judicial de la sociedad demandada contestó la demanda dentro del término legal.

En razón a lo anterior, resolvió de manera desfavorable la nulidad propuesta, y admitió la contestación de la demanda.

### **APELACIÓN**

Inconforme con tal decisión, el apoderado judicial de la parte demandada, presenta el 21 de octubre de 2020 recurso de apelación (Archivo No 10 expediente digitalizado), insistiendo en que el despacho debió adecuar el procedimiento dictando una providencia en obediencia de las directrices del Decreto 806 de 2020, y modificar la forma en que se debía adelantar la notificación del auto admisorio de la demanda; sin embargo, el despacho procedió a realizar la notificación en obediencia a una solicitud de la parte demandante, sin una providencia previa en la que le dé legalidad a los procedimientos; que la nulidad propuesta no es de naturaleza legal sino constitucional, concretamente por vulneración del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Carta Política; que no se entiende saneada la nulidad por haber procedido a contestar la demanda, ya que se está llevando al mismo tiempo dos procedimientos diferentes

en el trámite del proceso. En definitiva, pretende se declare la nulidad absoluta e insaneable por vulneración al debido proceso al omitirse la adecuación del trámite procesal al rito procedimental que introdujo el Decreto 806 de 2020.

Mediante auto del 22 de octubre de 2020 (Archivo No 11 expediente digitalizado) se concedió el recurso de apelación.

En la oportunidad legal el apoderado judicial de la parte demandante presentó alegatos de conclusión en la que sostiene que las nulidades son taxativas y están contenidas en el artículo 133 del C.G.P., de lo cual el recurrente no hace mención de ningún numeral donde pueda adecuarse la nulidad alegada; que no se presente violación al derecho de defensa, ya que en el plenario se vislumbran las notificaciones a la empresa demanda, al contrario se demuestra que no tiene interés en acudir al despacho, además contestó la demanda y esta fue recibida por el despacho; que la Corte Constitucional en la sentencia C-420 de 2020, realiza control de constitucionalidad y no advierte inexequibilidad del Decreto 806 de 2020.

## 2. ANÁLISIS DE LA SALA

Decisión recurrida que es susceptible de apelación en virtud del numeral 6º del artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, reformado por el artículo 29 de la Ley 712 de 2001; a la par de que surtido el trámite en esta instancia sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación propuesto, para lo cual se plantea el estudio del siguiente:

### 2.1 Problema Jurídico

La Sala dilucidará: ¿Si en el presente proceso se configura nulidad de lo actuado, al no emitir el a quo Auto mediante el cual adecuara el proceso al trámite que establece el artículo 8º del Decreto Legislativo 806 de 2020?

### 2.2 TESIS DE LA SALA Y SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

El sentido de la decisión de esta Corporación será **CONFIRMATORIO**, con apoyatura en la tesis de que no se configura nulidad frente a la notificación personal realizada a través del correo electrónico a la entidad demandada, allende que para la aplicación del Decreto Legislativo 806 de 2020 no se requiere emitir un

auto adecuando el proceso, de conformidad con los planteamientos que pasan a exponerse las siguientes,

### **2.3 NULIDAD CONSTITUCIONAL Y NOTIFICACIÓN PERSONAL DECRETO LEGISLATIVO 806 DE 2020.**

Esta Sala de Decisión es competente para resolver la controversia planteada, pues en los términos del numeral 6° del artículo 65 del C.S.T. y de la S.S., es procedente el recurso de apelación contra el Auto que decide sobre nulidades procesales.

Pues bien, el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, establece en el artículo 41, modificado por el artículo 20 de la Ley 712 de 2001, lo siguiente:

*“ARTICULO 32. FORMA DE LAS NOTIFICACIONES. Las notificaciones se harán en la siguiente forma:*

*A. Personalmente.*

*1. Al demandado, la del auto admisorio de la demanda y, en general, la que tenga por objeto hacerle saber la primera providencia que se dicte.”.*

No obstante, debido a la emergencia sanitaria generada por la COVID-19 y dentro del marco del estado de excepción social, económico y ecológico decretado, se expidió el Decreto Legislativo 806 de 2020, por medio del cual *“se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”*, el que en lo pertinente a la notificación personal dispuso:

*“ARTÍCULO 8. Notificaciones personales. Las notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviarán por el mismo medio.*

*El interesado afirmará bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la petición, que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar, informará la forma como*

*la obtuvo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar.*

*La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación.*

*Para los fines de esta norma se podrán Implementar o utilizar sistemas de confirmación del recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos.*

*Cuando exista discrepancia sobre la forma en que se practicó la notificación, la parte que se considere afectada deberá manifestar bajo la gravedad del juramento, al solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado, que no se enteró de la providencia, además de cumplir con lo dispuesto en los artículos 132 a 138 del Código General del Proceso.*

*PARÁGRAFO 1. Lo previsto en este artículo se aplicará cualquiera sea la naturaleza de la actuación, incluidas las pruebas extraprocerales o del proceso, sea este declarativo, declarativo especial, monitorio, ejecutivo o cualquiera otro.*

*PARÁGRAFO 2. La autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar información de las direcciones electrónicas o sitios de la parte por notificar que estén en las Cámaras de Comercio, superintendencias, entidades públicas o privadas, o utilizar aquellas que estén informadas en páginas Web o en redes sociales”.*

Vale acotar, que la Corte Constitucional en sentencia C-420 de 2020 declaró exequible de manera condicionada el inciso 3 del artículo 8 del Decreto Legislativo 806 de 2020, “en el entendido de que el término allí dispuesto empezará a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje”.

Ahora, en lo que interesa a la definición sustancial del pedimento propuesto en el *sub litium*, resulta oportuno extraer apartes de tal sentencia en lo tocante al artículo 8 ibídem, y que hace referencia a la notificación del auto admisorio de la demanda, así:

*El artículo 8º del Decreto sub examine es compatible con la Constitución Política por cuanto no vulnera prima facie la garantía de publicidad. Tal*

*como se explicó en precedencia (epígrafe “(a) La garantía de publicidad” supra), la Constitución no prevé un único modo de notificación para dar cumplimiento al principio de publicidad. Únicamente exige que aquel que sea seleccionado por el legislador tenga la capacidad de dar a conocer las decisiones que deban transmitirse a los interesados para el ejercicio de sus derechos de defensa y contradicción[540]. En principio, la Corte encuentra que la notificación del auto admisorio de la demanda mediante la remisión de un correo electrónico a la parte interesada es una medida plausible para lograr que esta conozca la existencia de un proceso en su contra y ejerza aquellos derechos.*

340. *En efecto, la Sala advierte que efectuar las notificaciones personales por medio del envío de la providencia como mensaje de datos no es una novedad[541]. (...).*

341. *Dado que no se observa una vulneración a una garantía propia del derecho al debido proceso, la constitucionalidad de esta medida dependerá de si es una respuesta proporcionada a las posibilidades fácticas y jurídicas que impone la pandemia y las medidas adoptadas para su contención. (...)*

342. *El artículo 8º persigue una finalidad que no está constitucionalmente prohibida. En efecto, la previsión de la notificación personal por mensaje de datos busca varias finalidades que no están prohibidas por la Constitución, y que, además, son constitucionalmente importantes, a saber: (i) dar celeridad a los procesos a los que se aplica el Decreto Legislativo sub examine; (ii) proteger el derecho a la salud de los servidores y usuarios de la administración de justicia; (iii) garantizar la publicidad y la defensa de las partes mediante la incorporación de reglas de garantía y control y (iv) reactivar el sector económico de la justicia, a fin de garantizar el derecho al trabajo y al mínimo vital de quienes de allí derivan su sustento.*

343. *La medida dispuesta en el artículo 8º del Decreto 806 de 2020 es idónea. La notificación personal mediante mensaje de datos es una disposición efectivamente conducente para lograr los fines propuestos porque: (i) elimina la obligación de comparecer al despacho para*

*notificarse, lo que reduce el riesgo para la salud y la vida de funcionarios y sujetos procesales; (ii) prescribe un remedio procesal para aquellos eventos en los que el interesado en la notificación no recibió el correo; (iii) prevé condiciones para garantizar que el correo, en efecto, es el utilizado por la persona a notificar; y (iv) permite que el interesado, en efecto, conozca la providencia a notificar, en tanto los correos electrónicos ofrecen seguridad y permiten probar la recepción y el envío de aquella.*

*(...)*

*345. Segundo, la medida previene cualquier posible limitación que esta pueda generar sobre el contenido iusfundamental del debido proceso por cuanto prevé un remedio procesal eficaz para proteger el derecho de defensa del notificado, que no se enteró de la providencia. En efecto, la disposición prevé que, en este caso, la parte interesada puede solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado. Esta disposición, contrario a lo argumentado por los intervinientes, no crea una causal adicional de nulidad, puesto que el numeral 8 del artículo 133 del CGP ya prevé la nulidad por indebida notificación del auto admisorio de la demanda. El artículo 8° examinado obliga a la parte interesada a tramitar la nulidad por esta causal, según el procedimiento previsto en los artículos 132 a 138 del CGP, lo cual, a su vez, garantiza los derechos de la parte accionante, que podría verse perjudicada con la declaratoria de nulidad. Por otro lado, una lectura razonable de la medida obliga a concluir que, para que se declare nula la notificación del auto admisorio por la razón habilitada en el artículo 8° no basta la sola afirmación de la parte afectada de que no se enteró de la providencia. Es necesario que el juez valore integralmente la actuación procesal y las pruebas que se aporten en el incidente de nulidad para determinar si en el trámite de la notificación personal se vulneró la garantía de publicidad de la parte notificada. En otras palabras, la Sala encuentra que la disposición no libra a la parte de cumplir con la obligación de probar los supuestos de hecho que soportan la causal de nulidad alegada. Por el contrario, la medida compensa la flexibilidad introducida por la norma, con la necesidad de proteger los derechos de defensa y contradicción de las partes, mediante la agravación de las consecuencias jurídicas, incluso con tácitas implicaciones penales, a fin de dotar de veracidad la información que sea aportada al proceso. Razón por la cual, la Corte constata que este*



*mecanismo más que generar un sacrificio a las garantías del debido proceso, busca garantizarlas durante la emergencia.*

*346. Tercero, la medida prevé condiciones que contribuyen a garantizar que el correo en el que se practicará la notificación sea, en efecto, el utilizado por la persona a notificar. Así, el inciso 5 del artículo que se estudia dispone que el interesado en la notificación debe afirmar bajo la gravedad de juramento que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al que utiliza la persona a notificar, para lo cual deberá indicar la manera en que obtuvo la información y aportar evidencias. A juicio de la Sala, este cambio en el modelo de notificación personal no es extraño ni novedoso, en tanto pretende, en virtud del deber de colaboración con las autoridades que tienen las partes procesales, garantizar que la dirección electrónica o sitio en el que se va a efectuar la notificación personal sea, en efecto, una dirección utilizada por el sujeto a notificar, a fin de realizar los principios de publicidad, celeridad y seguridad jurídica, y de garantizar los derechos de defensa y contradicción.*

A su vez, el artículo 16 del Decreto Legislativo 806 de 2020, establece que: “*El presente decreto legislativo rige a partir de su publicación y estará vigente durante los dos (2) años siguientes a partir de su expedición*”.

Ahora bien, en orden a desatar el meollo del asunto, importa resaltar que en efecto la admisión de la demanda se verificó con el proferimiento del Auto del 23 de agosto de 2019 (Archivo No 2 expediente digital); no obstante, al expedirse y publicarse el Decreto Legislativo 806 el 4 de junio de 2020, cambió transitoriamente la modalidad de notificación personal; de suerte que, en vista de que en el *sub examine* no había sido posible la notificación del auto admisorio de la demanda a la entidad demandada, bien podía la parte interesada solicitar ante el juez de la causa que la notificación se realizara al correo electrónico de la entidad convocada al proceso, tal como ocurrió el 16 de septiembre de 2020, mediante petitorio en el que la apoderado judicial del actor, solicitó “nuevamente” enviar la citación al correo electrónico [cgl@touchstonegoldholdings.com](mailto:cgl@touchstonegoldholdings.com), aportando como soporte el condigno certificado de existencia y representación legal.

Sea lo primero indicar por la Sala que no se avizora irregularidad alguna, en la medida en que al tenor de lo dispuesto en el artículo 13 del CGP: “*las normas*

*procesales son de orden público, y por consiguiente, de obligatorio cumplimiento*”, más aún, tratándose de normas procesales de excepción con vigencia transitoria de dos (2) años, al establecerse con la expedición y vigencia del Decreto Legislativo 806 de 2020 una modalidad alternativa y sucedánea de la notificación personal por vía correo electrónico, sin que se condicione que para la aplicación de tal disposición a los procesos que estén en trámite deba emitirse un auto con el cual se adecúe el procedimiento, como equivocadamente lo entiende y peticiona el apoderado judicial de la entidad demandada, y en tal sentido, estando pendiente en el caso de autos la notificación del auto admisorio de la demanda, le correspondía al juzgador en virtud de lo establecido en el artículo 48 del CPT y la S.S. como director del proceso verificar que la notificación del auto admisorio al demandado se ajustara a lo preceptuado en el artículo 8 del Decreto Legislativo 806 de 2020, lo que efectivamente ocurrió, dado que no de otra manera, la entidad encartada una vez se enteró de la demanda incoada en su contra a través del correo electrónico, constituyó apoderado judicial y procedió a contestarla en los términos previstos en la ley procesal laboral, al no entrar a regular esta materia el Decreto Legislativo 806 de 2020, sino en el artículo 74 del CPT y de la S.S., con lo cual, con lo cual deviene en improcedente la petición elevada por el apelante, pues se itera, el Decreto Legislativo 806 de 2020, de ninguna manera suspende transitoriamente el procedimiento laboral que establece el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, sino que en virtud de la emergencia sanitaria decretada dentro del marco de las facultades especiales que le confiere la constitución nacional al Gobierno Nacional en el artículo 215 superior, en concordancia con la Ley 137 de 1994, y el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, *“Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional”*, adecúa determinadas etapas y actos procesales utilizando los medios tecnológicos disponibles para garantizar el pleno ejercicio del acceso a la administración de justicia, el debido proceso, el derecho de defensa y de contradicción.

Inclusive, en el artículo 8 del Decreto Legislativo 806 de 2020 expresamente se indica que en el trámite de la notificación personal a través del correo electrónico puede generarse nulidades, causal que encuadra en el numeral 8 del artículo 133 del CGP; no obstante, ello tiene lugar cuando la parte notificada no se enteró de la providencia, correspondiéndole al juzgador determinar si en el trámite de notificación personal se vulneró la garantía de publicidad, lo que a todas luces no se presenta en el *sub litium*, puesto que el acto de notificación de la demanda a

través del correo electrónico como modalidad alternativa y sucedánea cumplió su finalidad, esto es, fue recibido por el destinatario, y procedió a ejercer su derecho de defensa a través de la contestación del libelo genitor, con lo cual, considera la Sala ninguna garantía de orden constitucional ni procesal se encuentra en entredicho.

El recurrente sustenta la alzada en que se configura una nulidad constitucional por vulneración al debido proceso; al respecto cabe resaltar que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al resolver un incidente de nulidad en sede de Casación, precisó al respecto que:

*“Es por ello que al interpretar el artículo 29 de la Constitución Política que cita el memorialista “la plenitud de formas propias de cada juicio” hay que aplicarla ponderando la realización de los derechos fundamentales consagrados en la misma Carta Política y, es por esta potísima razón, que el mismo legislador le ha dado a los jueces del trabajo, sin distinción alguna, la obligación de asumir la dirección del proceso adoptando las medidas necesarias para garantizar los derechos fundamentales, tal como reza el artículo 48 del C.P. del T y SS modificado por el artículo 7º de la Ley 1149 de 2007” (Radicación No 43333 del 29 de mayo de 2012).*

Bajo los anteriores parámetros, educe la Sala que en el presente asunto no se vulneran derechos de rango constitucional, y en esa dirección tenga cabida el argumento de que el juez de instancia deba de emitir un auto adecuando el trámite a los lineamientos señalados en el Decreto Legislativo 806 de 2020, pues al verificar el acto de notificación personal a través de correo electrónico, este cumplió plenamente su finalidad y se hizo acorde a las previsiones del aludido Decreto, por lo que se impone para la Sala despachar de manera negativa la alzada propuesta.

En ese orden de ideas, habrá de confirmarse la decisión de primer grado en la que con acierto el a quo no accedió a la declaratoria de nulidad propuesta.

## **COSTAS**

En segunda instancia no se impondrá condena en costas en esta instancia por no haberse causado.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN**, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:


**PRIMERO: CONFIRMAR** el auto materia de apelación proferido el 14 de octubre de 2020 por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de este proveído.

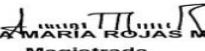
**SEGUNDO: SIN COSTAS** en esta por no haberse causado y en la medida de su no comprobación.


Lo resuelto se notifica **POR ESTADOS**.


Déjese copia de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de procedencia.

Se declara surtido el presente acto y en constancia se firma por los que intervinieron.

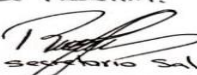
  
VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO  
Magistrado Ponente

  
SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE  
Magistrada

  
CARLOS JORGE RUIZ BOTERO  
Magistrado

  
RUBÉN DARIO LÓPEZ BURGOS  
Secretario

Constancia Secretaría)  
Se da constancia que las anteriores firmas corresponden a la  
firma original de los magistrados que integran la Sala Quinta  
de Decisión Laboral, de la Sala Laboral del Tribunal Superior  
de Medellín.

  
Secretario Sala Laboral

**Certifico:** Que el auto anterior fue notificado por **ESTADOS No. 45** fijados hoy en la secretaria de este Tribunal a las 8:00 a.m. Medellín, 15 de marzo de 2021, y pueden consultarse en <https://tribunalmedellin.com/laboral/estados-edictos-y-traslados-laboral>

\_\_\_\_\_  
Secretario